



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

AUTO NÚMERO (11)

Santiago de Cali, veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022)

“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE 006 DE 2017”

El Director Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales, en ejercicio de la función policiva y sancionatoria que le ha sido conferida mediante la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3572 de 2011 y delegada mediante la Resolución 0476 del 28 de diciembre de 2012 y,

CONSIDERANDO

I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La Constitución Política de 1991 en su artículo 4 inciso segundo establece que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Asimismo, el artículo 8 superior señala que es deber del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, encontrándose dentro de ellas los Parques Nacionales Naturales, que por mandato del artículo 63 superior son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

De conformidad a los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, son deberes constitucionales del Estado, entre otros, garantizar el acceso y goce a un ambiente sano, proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación y restauración, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados; y garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlas.

II. COMPETENCIA

El artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, le corresponde ejercerla a Parques Nacionales Naturales de Colombia, respecto de las áreas protegidas cuya gestión y administración ha sido confiada, particularmente, el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2.2.2.1.10.1. del Decreto 1076 de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una unidad administrativa especial adscrita al sector ambiente y desarrollo sostenible que tiene a su cargo la

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Igualmente, en el artículo 2, numeral 13 del Decreto 3572 de 2011, se establece que a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia le corresponde ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.

De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.16.1. del Decreto 1076 de 2015, le corresponde a Parques Nacionales Naturales de Colombia organizar sistemas de control y vigilancia para hacer cumplir las normas sobre prohibiciones y obligaciones de los usuarios del Sistema de Parques Nacionales Naturales contenidas en dicho Decreto, y las contenidas en el Decreto-Ley 2811 de 1974 – Código de Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (CNRNR). Para esto, el artículo 2.2.2.1.16.2 del Decreto 1076 de 2015 citado establece que el régimen sancionatorio aplicable será el previsto en la Ley 1333 de 2009, con lo cual se da aplicación a las funciones policivas que el artículo 2.2.2.1.16.3 del mismo decreto reconoce en cabeza de los funcionarios de Parques Nacionales.

La Resolución 0476 del 28 de Diciembre de 2012 expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia y publicada en el diario oficial el día 05 de marzo de 2013, mediante su artículo quinto le otorgó la potestad a los Directores Territoriales en materia sancionatoria para conocer en primera instancia los procesos sancionatorios que se adelanten por infracciones a la normatividad ambiental y por los daños ambientales que se generen en las áreas protegidas asignadas a la Dirección a su cargo, para lo cual podrá expedir los actos administrativos de fondo y de trámite que se requieren.

Igualmente, el párrafo del artículo ibidem establece que los Directores Territoriales son quienes resolverán el recurso de reposición contra los actos administrativos que nieguen la práctica de pruebas solicitadas y los que pongan fin a un proceso sancionatorio, y concederán el recurso de apelación ante el Subdirector de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas o lo rechazarán según el caso, de acuerdo con lo establecido en el Código de Contencioso Administrativo.

III. FUNDAMENTOS LEGALES DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES Y DISPOSICIÓN QUE DA ORIGEN AL ÁREA PROTEGIDA

El Sistema de Parques Nacionales Naturales es el conjunto de áreas de diversas categorías que se reservan y declaran en beneficio de los habitantes de la nación, por tener valores excepcionales para el patrimonio nacional y debido a sus características naturales, culturales o históricas, de conformidad con lo señalado en el artículo 327 del CNRNR.

El Sistema de Parques Nacionales comprende diversos tipos de áreas, las cuales se encuentran descritas en el artículo 329 del Decreto 2811 de 1974. Estas son: reserva natural, área natural única, santuario de flora, santuario de fauna, vía parque y **parque nacional**. Esta última área, corresponde según la norma mencionada “a un área de extensión que permite su autorregulación, ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo”.

Las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales gozan de especial protección constitucional. Por un lado, según el mandato del artículo 63 de la Constitución Política, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 2 de 1959, las zonas establecidas como Parques Nacionales Naturales son de *utilidad pública*, razón por la cual, en estas áreas los derechos de particulares son limitados a fines estrictamente ecológicos en consonancia con el inciso segundo de artículo 58 de la Constitución Política de 1991.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

En ese sentido, las actividades que podrán realizarse serán las exclusivamente autorizadas por el artículo 331 del CNRN, las cuales requieren autorización previa, quedando prohibidas aquellas que no se enmarquen en dicha tipología, es decir aquellas que no estén consagradas en el artículo 331 del CNRN. Ahora bien, el artículo 336 del CNRN y sus reglamentos contenidos en el Decreto 622 de 1977, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, particularmente en su artículo 2.2.2.1.15.1 y siguientes, establece aquellas actividades que se encuentran prohibidas en los Parques Nacionales Naturales.

Así las cosas, teniendo claros algunos de los fundamentos legales clave que rigen el Sistema de Parques Nacionales Naturales, conviene exponer la disposición que da origen al área protegida. Así pues, mediante la Resolución No. 092 de Julio 15 de 1968, se crea y alindera el **PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI** “con el fin de preservar la flora, la fauna, el caudal de los lagos y los ríos, las bellezas escénicas naturales y los yacimientos arqueológicos, resérvense y declárense como Parques Nacionales Naturales, los siguientes sectores: **a).FARALLONES DE CALI, zona que se encuentra ubicada en jurisdicción de los Municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca**” (Negrilla fuera del texto original).

El 26 de enero de 2007 se expidió la Resolución No. 049 “Por medio de la cual se adopta el plan de manejo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali”. Este plan se constituye en el instrumento rector para la planificación del área protegida y establece lo relacionado con diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico que se llevará a cabo en el PNN Farallones; así mismo, establece en el Parágrafo Segundo del artículo tercero, la zonificación y régimen de usos, la prohibición a los usuarios del PNN Farallones de Cali realizar las actividades o conductas previstas en los artículo 30 y 31 del Decreto 622 de 1977 (hoy, artículo 2.2.2.1.15.1 y 2.2.2.1.15.2 del Decreto 1076 de 2015) por alteración del ambiente natural y por alteración de la organización de las áreas del Sistema del Parque Nacional Natural.

En lo que respecta al expediente 006 de 2017, en el cual se investiga al Sr. Selfides José Realpe Leitón, se cuenta con los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 20 de enero de 2017, el Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control del PNN Farallones de Cali, realizó recorrido en el sector Quebrada Honda ubicado en el corregimiento Los Andes, zona rural de la ciudad de Cali, en jurisdicción del PNN Farallones de Cali; encontrando la realización de actividades como: ampliación de la frontera agrícola por medio de limpieza de terreno y siembra de cultivos de girasol. Lo anterior, se identificó en las siguientes coordenadas:

N	W	Altura
03° 25' 34.1”	076° 38' 08.5”	1930 msnm

Al momento del recorrido no fue posible identificar al presunto responsable.

SEGUNDO: Debido a lo anterior, por medio del **Auto No. 004 del 16 de febrero de 2017**, se impuso medida preventiva en contra de INDETERMINADOS; la cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades de ampliación de frontera agrícola y siembra de cultivos de girasol. Este acto administrativo fue publicado en la oficina del corregidor de Los Andes, entre el 03 y el 27 de marzo y en la oficina del PNN Farallones de Cali entre el 07 y el 21 de marzo de 2017.

TERCERO: El 16 de febrero de 2017, se llevó a cabo recorrido de verificación con la finalidad de dar respuesta a una queja interpuesta por la comunidad. En dicho recorrido se verificó la continuación en las actividades tendientes a la expansión de la frontera agrícola, a través de una socla sobre un área

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

con dimensión aproximada de (1/2) hectárea, en la que se vio afectado un rastrojo alto que se encontraba en recuperación pasiva, así como especies nativas tales como: Cordoncillo, Balso Blanco, CueriNegro, Yarumo, Palmicha.

Al momento del recorrido se encontró al señor Selfides Jose Realpe Leiton, quien manifestó ser el presunto responsable de la socola, realizada con la finalidad de sembrar girasoles y así extender su cultivo. Los miembros del Grupo Operativo del PNN Farallones de Cali le explicaron la normatividad y las prohibiciones que rigen en el Área Protegida.

CUARTO: Debido a lo anterior, mediante el **Auto No. 027 del 03 de abril de 2017** se impuso medida preventiva en contra del señor SELFIDES JOSÉ REALPE LEITON, la cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades de ampliación de la frontera agrícola, tala, socola y siembra de cultivos de girasol. Este acto administrativo fue comunicado el 05 de abril de 2017.

QUINTO: El 24 de abril de 2017, el Grupo Operativo del PNN Farallones de Cali realizó recorrido de seguimiento y control, evidenciando que el señor SELFIDES no acató la medida preventiva, dado que continuó realizando actividades prohibidas por la legislación ambiental. A continuación, se describe la situación encontrada en campo:

- Tala sobre un individuo de la especie vegetal arbórea identificada como Mestizo (*Matayba scombiculata* Radlk.) con un CAP 126 cm. y 7 metros de longitud.
- Socola y rocería sobre especies arbustivas y herbáceas que se encontraban en un área de 3.800 M².
- **Introducción y uso de sustancias tóxicas**, específicamente dos productos encontrados en el lugar que presentan en su etiqueta el nombre de **"GLIFOSOL"** y **"MANZATE"** presuntamente aplicado sobre un área de 1750 M², pues allí se observó el secamiento homogéneo de las plantas herbáceas con una coloración ocre, afectando el hábitat de especies de fauna y flora protegidas, pues se pudo evidenciar un anidamiento terrestre con dos huevos de un ave que es identificada como Gorrión Copetón (*Zonotricha capensis*).

Este recorrido se realizó en compañía de una de las integrantes del equipo jurídico de la DTPA, quien le explicó en términos sencillos cada implicación jurídica del Auto No. 027 del 3 de abril de 2017 (medida preventiva). Asimismo, se le explicó la normatividad y las prohibiciones que rigen en el área protegida, así como las razones por las cuales sus actividades afectan el ambiente natural. Posteriormente, se indagó en las razones por las cuales se asentó en el sector junto con su familia. Lo que el señor SELFIDES relató fue que se asentó en el sector a causa del desplazamiento forzado del cual fue víctima en el mes de diciembre del año 2012. Una vez el señor SELFIDES expuso esta situación, se le preguntó si había realizado junto con su familia la declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento; a lo cual respondió que efectivamente lo había hecho y que contaba con el Registro Único de Víctimas bajo el No. de declaración: **AK0000526717**, el cual acredita la calidad de víctima de desplazamiento forzado de las siguientes personas identificadas como se relaciona a continuación:

Tipo de Documento	No. de Documento	Nombre y Apellidos
Cédula de Ciudadanía	13078019	Selfides Jose Realpe Leiton
Cédula de Ciudadanía	27185776	Alba María Andrade Ortiz
Cédula de Ciudadanía	1144138814	Arely Realpe Andrade
Cédula de Ciudadanía	13079270	Sigfredo Realpe Andrade
Registro Civil	1089906994	Samuel Kaleth Realpe Ortiz
Cédula de Ciudadanía	1089906532	Sorani Ortiz Bolaños
Tarjeta de Identidad	1089904675	Sebastián Realpe Ortiz

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

El señor SELFIDES manifestó ser campesino y ejercer estas actividades agropecuarias y de tala, debido a que su sustento económico y el de su familia depende de sus cultivos de girasol. Cuando se le preguntó si tenía junto a su familia alguna tierra de su propiedad en Nariño, respondió que efectivamente la tenía pero que no conocía el estado actual de la misma (en términos de su posesión o tenencia). También manifestó no conocer el estado actual del proceso adelantado ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, para tener acceso a las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral.

SEXTO: El 23 de mayo de 2017, se incluyó el **informe técnico inicial No. 20177660003916** en el cual se realizó un análisis de las afectaciones ambientales generada a partir de las actividades reportadas en los hechos anteriores. En dicho informe se identificaron los siguientes **impactos ambientales**: alteración del paisaje, deterioro de la cobertura vegetal, alteración de cantidad y calidad de hábitats. Asimismo, se evidenció que se **afectaron los siguientes bienes de protección ambiental**: escenarios paisajísticos, protección de cuencas, ecosistemas protegidos, hábitat de especies de flora protegidas. Finalmente se realiza una calificación de importancia de la presunta infracción, la cual arrojó que la misma es de naturaleza **SEVERA**.

En este informe también se indican las implicaciones y riesgos asociados al uso del GLIFOSATO:

"El GLIFOSOL tiene como principal componente El glifosato, N-(fosfometil) glicina, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos. El Glifosato puede ser altamente tóxico para animales y humanos, pueden generar lesiones en glándulas salivales, inflamación gástrica, daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras)".

SÉPTIMO: El 22 de junio de 2018, se llevó a cabo recorrido de seguimiento y control, con la finalidad de verificar el estado actual de las actividades objeto de investigación. Lo que se encontró fue que los cultivos de girasol se encuentran escalonados en dos etapas: (i) La parte alta del predio con girasoles de un (01) metro de alto aproximadamente. La parte baja del predio con girasoles de veinte (20) centímetros de alto aproximadamente. Igualmente se pudo observar que la zona afectada por tala, socola y rocería sobre un área aproximada de 3.500 metros cuadrados, no fue cultivada aún.

OCTAVO: Por medio del **Auto No. 081 del 14 de septiembre de 2018**, se apertura investigación sancionatoria de carácter ambiental en contra del Sr. **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITON** identificado con C.C. 13.078.019 de Cali, por la presunta vulneración de la normatividad ambiental al haber realizado actividades de tala, socola, rocería, siembra de cultivos de girasol y uso de sustancias tóxicas. Este acto administrativo fue notificado el 17 de septiembre de 2018, a través de la publicación del aviso en la Gaceta Ambiental Oficial de Parques Nacionales Naturales.

NOVENO: El 30 de julio de 2020, se realizó recorrido de seguimiento y control, encontrando nuevos cultivos de Anturios. Asimismo, hacía la parte alta del predio se observó la ampliación de la frontera agrícola a través de la realización de actividades de tala sobre un área aproximada de 62 metros cuadrados, afectando árboles y arbustos como: Balsos, Dragos, Tabaquillos, Yarumo, Piperáceas, Melastomatáceas, y Heliconias. Adicionalmente, se observó la limpieza de una zona que estaba en rastrojo bajo, afectando: Gramíneas y Cadillos.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

DÉCIMO: Por medio del **Auto No. 73 del 09 de junio de 2021**, se formularon cargos en contra del Sr. Selfides José Realpe Leitón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.078.019, por la presunta vulneración de la siguiente normatividad:

- I. Los numerales 1, 4 y 12, del Artículo 2.2.2.1.15.1. del Decreto 1076 de 2015.

Este acto administrativo fue notificado personalmente el 14 de septiembre de 2021.

DÉCIMO PRIMERO: El señor Selfides José Realpe Leitón no presentó escrito de descargos frente al Auto No. 73 del 09 de junio de 2021.

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PERÍODO PROBATORIO

- **Constitución Política de 1991**

Nuestra Constitución Política, establece en su artículo 29 lo siguiente: *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (...) Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. **Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho**”* (Cursiva y negrita fuera del texto).

- **Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.**

El párrafo único del artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece que en materia ambiental se presume el dolo o la culpa del infractor, razón por la cual será este quien tendrá la carga de la prueba y, por ende, podrá disponer de los medios probatorios legales que considere necesarios para desvirtuar su responsabilidad. Ahora bien, de igual forma señala que en caso de que no se llegase a demostrar la inexistencia de responsabilidad, la autoridad ambiental competente está llamada a sancionar a la persona que haya cometido aquella conducta constitutiva de infracción.

Lo mencionado anteriormente, no desconoce la potestad que tiene la autoridad ambiental frente a la facultad de adelantar todas aquellas diligencias administrativas que considere pertinentes para verificar los hechos objeto de proceso sancionatorio, frente a lo señalado, el artículo 22 de la Ley *ibidem* indica que *“La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios”* (Cursiva fuera del texto).

En concordancia con lo indicado en los párrafos anteriores, el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 dispone que la autoridad ambiental *“ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas*

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas” (Cursiva fuera del texto). Igualmente, el párrafo único del artículo mencionado señala que *“contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas”*. (Cursiva fuera del texto).

- **Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.**

El artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 señaló que, en el desarrollo del trámite de procedimientos administrativos, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos en materia probatoria *“Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.*

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil” (Cursiva fuera del texto), hoy Ley 1564 de 2012 *“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”*.

Siguiendo esta línea, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece que *“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”*; resulta importante indicar que, tal y como ya fue mencionado, la norma aplicable a la fecha es la Ley 1564 de 2012.

En congruencia con lo anterior, la Ley 1564 de 2012, dispone en el artículo 164 que *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”*. Frente a este punto, la Corte Constitucional a través de la sentencia 034 de 2014, se ha pronunciado afirmando lo siguiente:

La importancia de las pruebas en todo procedimiento es evidente, pues solo a través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada trámite, puede el funcionario administrativo o judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial (Cursiva fuera del texto).

Consecuentemente, el artículo 165 de la norma *Ibidem* señala que *“Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la*

“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE 008 DE 2013”

inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (...) (Cursiva fuera del texto).

- **Requisitos intrínsecos en materia probatoria.**

➤ **NECESIDAD DE LA PRUEBA:**

En este mismo sentido, y en concordancia con lo señalado tanto por el artículo 164 del Código General del Proceso como por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, a través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado Consejero Ponente Jorge Velásquez (30 de junio de 1967), estipuló frente a la necesidad de la prueba que:

Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, convirtiéndolas en el medio de verificación de las proposiciones que las partes formulan en el proceso, así como de los hechos alegados en el mismo, con la finalidad de otorgarle al juez la convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de dichas proposiciones.

De conformidad con lo anterior, se tiene que las pruebas son un medio de verificación de las afirmaciones, aseveraciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al Juez las pautas necesarias para tomar una decisión.

*No obstante, no solo se necesita allegar oportunamente las pruebas que se pretenden hacer valer dentro de un proceso, sino que las mismas deben ser acordes con el asunto objeto de este, debiendo cumplir con ciertos requisitos de **conducencia, pertinencia y eficacia** de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado (Cursiva y negrilla fuera de texto).*

Asimismo, se debe tener en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-28-000-2014-00111-00(S) del 5 de marzo de 2015, al referir que:

La finalidad de la prueba es llevar al juez a la certeza o conocimiento de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es soportar las pretensiones o las razones de la defensa. Para el efecto, la ley previó una serie de medios de prueba que pueden ser decretados en el marco del proceso, aquellos están enunciados en el artículo 165 del Código General del Proceso.

➤ **PERTINENCIA DE LA PRUEBA**

El Consejo de Estado en Sentencia 11001-03-28-000-2014-00111-00(S) del 5 de marzo de 2015, con fundamento en la doctrina, ha señalado qué se entiende por pertinencia de la prueba:

La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas deben versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo, entran en el campo de la impertinencia. Bajo la misma línea argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba impertinente es aquella que nada aporta a la Litis, pues busca probar un hecho inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso”

Por otro lado, de acuerdo con lo expuesto en el Manual de Derecho Probatorio del autor Jairo Parra Quijano, se entiende por pertinencia de la prueba:

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

La adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. Así, como en nuestra vida diaria, al estar conversando con una persona sobre determinado tema, consideramos bienvenidos a los que quieren hablar sobre el mismo y predicamos la impertinencia de quienes introducen conversaciones de otros temas, exactamente lo mismo sucede en el proceso¹.

➤ **CONDUCENCIA DE LA PRUEBA**

Así mismo, el autor Jairo Parra Quijano menciona en su obra que, cuando se habla de que una prueba es conducente se debe entender que:

Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho.

Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado. El sistema de la prueba legal, de otra parte, supone que el medio que se emplea, para demostrar el hecho, está consagrado en la ley.

La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio².

➤ **UTILIDAD DE LA PRUEBA**

En lo que respecta a la utilidad de la prueba, el Dr. Devis Echandía en su obra denominada Tratado de Derecho Procesal Civil afirma que esta:

Debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir que debe prestar algún servicio, ser necesaria o por lo menos conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se base la pretensión contenciosa o se funda la petición del proceso voluntario o del incidente, esto es, que no sea completamente inútil. Se persigue el mismo doble fin que con los requisitos de la conducencia y pertinencia de la prueba.

Lo anterior ratificado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección B, CP Bertha Lucia Ramírez de Páez, del 23 de julio de 2009, Radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09).

Así pues, el criterio de utilidad es esencial para definir cuáles serán las pruebas que se decretarán y practicarán en el periodo probatorio, previa argumentación por parte de la autoridad ambiental. La doctrina ha referido que esta se predica cuando con la prueba puede establecerse un hecho materia de la controversia, que aún no se encuentra demostrado con otra. Esto quiere decir que, una prueba puede ser pertinente y conducente, pero a la misma vez, INÚTIL, si, por ejemplo, el hecho que se quiere probar ya ha quedado demostrado dentro del proceso. En estos casos el juez tiene la facultad de rechazarla o abstenerse de practicarla en aplicación del principio de economía procesal (CAMACHO, A., 1998).

Conforme a estos criterios, solo serán decretadas y practicadas por parte de la autoridad ambiental, aquellas pruebas **necesarias, pertinentes conducentes y útiles**.

¹ Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Ediciones Librería El Profesional. Décima sexta edición 2007. Pág. 153, Bogotá.

² Ibídem.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

**II. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO DE PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

• PRUEBAS APORTADAS AL PLENARIO

- Documentales

Respecto de las pruebas documentales, el artículo 243 de la Ley 1564 de 2012 establece que las mismas son entendidas como *(...) los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares (Cursiva fuera del texto)*. Igualmente, realiza una distinción entre documentos públicos y privados y establece que el *“(...) documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública” (Cursiva fuera de texto)*.

Así mismo, el artículo 244 de la norma *Ibidem* indica que los documentos se consideran auténticos cuando existe certeza sobre la persona que los ha elaborado, manuscrito o firmado y que todo documento público se presume auténtico mientras no se pruebe lo contrario. De otra parte, el artículo 245 señala que los documentos podrán ser aportados en original o en copia.

De conformidad con lo expuesto en el presente ítem, a la fecha Parques Nacionales Naturales de Colombia, en su calidad de autoridad ambiental competente, ha recolectado, en el marco del proceso sancionatorio No. 006 de 2017, los documentos que se relacionan a continuación los cuales serán analizados y tenidos como pruebas documentales:

1. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 20 de enero de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
2. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental, del 16 de febrero de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
3. Información cartográfica de la presunta infracción.
4. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 24 de abril de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
5. Dos (02) Certificados Registro Único de Víctimas (RUV) del grupo familiar Realpe Andrade.
6. Informe técnico inicial para proceso sancionatorio con No. de radicado 20177660003916 del 23 de mayo de 2017.
7. Escritura pública No. 213 del 28 de enero de 2015.
8. Acta de declaración bajo juramento para fines extraprocesales del 28 de enero de 2015.
9. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 22 de junio de 2018, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
10. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 30 de julio de 2020, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
11. Registro fotográfico que reposa en el expediente.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

Con fundamento en lo dispuesto en el presente acto administrativo, el Director de la Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia:

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. – APERTURAR el periodo probatorio en el marco del proceso sancionatorio ambiental No. 006 de 2017, que cursa en contra del señor **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.078.019, con el fin de practicar las pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y determinar si existe responsabilidad administrativa por la violación a la normatividad ambiental que se le imputó mediante Auto No. 73 del 09 de junio de 2021.

Durante un término de treinta (30) días, Parques Nacionales Naturales de Colombia practicará las pruebas que hubieren sido solicitadas por el presunto infractor y, de igual forma, podrá ordenar de oficio las que consideré necesarias.

Parágrafo primero. - El término establecido en el presente artículo, será prorrogable hasta por sesenta (60) días, previo concepto técnico, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO. - OTORGAR valor probatorio a:

1. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 20 de enero de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
2. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental, del 16 de febrero de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
3. Información cartográfica de la presunta infracción.
4. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 24 de abril de 2017, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
5. Dos (02) Certificados Registro Único de Víctimas (RUV) del grupo familiar Realpe Andrade.
6. Informe técnico inicial para proceso sancionatorio con No. de radicado 20177660003916 del 23 de mayo de 2017.
7. Escritura pública No. 213 del 28 de enero de 2015.
8. Acta de declaración bajo juramento para fines extraprocesales del 28 de enero de 2015.
9. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 22 de junio de 2018, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
10. Informe de campo para proceso sancionatorio ambiental del 30 de julio de 2020, por parte del Grupo Operativo de Prevención, Vigilancia y Control.
11. Registro fotográfico que reposa en el expediente.

ARTÍCULO TERCERO. - CITAR y hacer comparecer a diligencia de interrogatorio de parte al señor **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITÓN**, con la finalidad de interrogarle sobre los hechos objeto del presente proceso sancionatorio.

Parágrafo segundo. - La presente diligencia se realizará previa citación por parte de este Despacho, en la cual se indicará la fecha, lugar y hora de recepción de la misma.

ARTÍCULO CUARTO. - SOLICITAR la realización de una entrevista al señor **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITÓN**, desde la perspectiva social, con la finalidad de indagar en los antecedentes sociales, culturales y económicos que lo relacionan con el territorio.

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**

ARTÍCULO QUINTO. - SOLICITAR al Sr. **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITÓN**, presentar ante esta dependencia los documentos que permitan revelar su capacidad socioeconómica:

1. Certificado de ingresos, declaración de renta o constancia laboral.
2. Si es independiente certificado expedido por un contador público con copia de la tarjeta profesional del contador.
3. Constancia de registro de cuentas bancarias y los extractos de los últimos tres meses.
4. Certificado de inscripción en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
5. Documento en el cual se pueda identificar que es beneficiario de un programa social del gobierno tales como: ‘Familias en Acción’, ‘Colombia Mayor’, ‘Programa de Alimentación Escolar (PAE), Formación Técnica y Superior del SENA, ‘Programa "De Cero a Siempre"’, programa ‘Ser Pilo Paga’, entre otros.

Tales documentos deben ser presentados en el término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación del presente Auto.

ARTÍCULO SEXTO. -NOTIFICAR al Sr. **SELFIDES JOSÉ REALPE LEITÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.078.019, de las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo de conformidad con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PRACTICAR las diligencias necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de la infracción a las normas que rigen las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

ARTÍCULO OCTAVO. – PUBLICAR el presente acto administrativo en la gaceta ambiental de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO. - COMISIONAR al Director Territorial Pacífico para que realice las actuaciones que son ordenados en el presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO. - CONTRA el presente Auto no procede ningún recurso legal, conforme al párrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

Dado en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Robinson Galindo T.

**ROBINSON GALINDO TARAZONA
DIRECTOR TERRITORIAL PACÍFICO
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Proyectó: Andrea Jaramillo Gómez - Profesional Jurídica DTPA. *ANDREA JARAMILLO GÓMEZ*

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA EL PERIODO PROBATORIO EN EL MARCO DEL
EXPEDIENTE 008 DE 2013”**